

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública:

14-SI-2019

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL:** San Salvador, a las trece horas y cuarenta minutos del once de abril de dos mil diecinueve.

El presente procedimiento inició el dos de abril del año en curso, por medio de solicitud de información presentada por la señorita [REDACTED].

**Considerandos:**

**I. Relación de los hechos.**

La ciudadana [REDACTED], solicitó información administrada por el TEG así: “Copia electrónica del acta de sesión del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), sesión 17-2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve. b) Informe del detalle de miembros del Pleno del TEG que votaron a favor del acuerdo N° 121-TEG2019, de fecha 20 de marzo de 2019, punto 6 de la sesión 17-2019, por el cual se acordó plantear un amparo contra el acto administrativo emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, respecto del caso 145-A-2017. c) Copia de la demanda de amparo presentada por el Tribunal de Ética Gubernamental ante la Sala de lo Constitucional, con número de referencia 122-2019; en contra de los actos administrativos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, respecto del caso 145-A-2017” (sic).

Se determinó que, por su naturaleza, la información solicitada es administrada por la Secretaría General y la Unidad de Asesoría Jurídica de este tribunal, por lo cual, les fue requerida mediante memorando N° 20-UAIP-2019 de fecha dos de abril del presente año.

Las unidades requeridas trasladaron la información solicitada por la señorita [REDACTED], respectivamente.

**II. Fundamentos de Derecho.**

El artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresar y difusión del pensamiento, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señalan que el acceso a la información es una herramienta eficaz para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción; por lo cual es obligación del Estado garantizar su libre y democrático ejercicio.

En el marco de la competencia subjetiva, los artículos 50 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP–, otorgan a los oficiales de información las potestades requeridas en el tratamiento de las solicitudes de información.

Además, los artículos 36 y 66 de la LAIP, 50, 52, 54 y 55 de su Reglamento indican los requisitos que debe contener la solicitud de información, así como el análisis de

admisibilidad que se hará sobre la misma, debiendo en todo caso fundar y motivar la decisión adoptada a fin de evidenciar la certeza de lo afirmado - *Ratio iuris*-.

En el caso particular, se hacen las siguientes consideraciones:

i) Luego de verificada la solicitud de ciudadana [REDACTED], se ha concluido que cumple los requisitos de admisibilidad.

ii) El Art. 2 de la LAIP, establece que, *“toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna”*. En esa línea, la información a la que se refiere la anterior disposición es: *la información pública y demás de su especie*.

En esa sintonía, la letra c) del artículo 6 de la misma ley, nos define que debemos de entender por información pública, así: *“es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial*.

*Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por éstos a cualquier título”*.

iii) Tal como lo sostiene la doctrina, el *derecho de acceso a la información pública* *“es aquel mediante el cual, los particulares pueden solicitar y recibir información pública que los sujetos obligados tengan en su poder”*

Ciertamente, queda demostrado que el derecho de acceder a la información pública implica, que esta exista, haya sido generada, administrada o se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada.

iv) Por otra parte, es dable señalar que en el contenido de la demanda de amparo ref. 122-2019, contra actos del Instituto de Acceso a la Información Pública, solicitada por la señorita [REDACTED], existen elementos y datos cuya divulgación inapropiada podría dañar la intimidad personal, familiar y el honor de su titular (información confidencial y datos personales), así como generar sanciones administrativas y penales para el suscrito. En ese sentido, en base a lo dispuesto en los artículos 30 de la LAIP, es preciso censurar aquella información que está íntimamente unida a la persona, que nace con ella, y que no puede separarse en toda su existencia. Razón por la cual es posible acceder a este punto en la versión pública correspondiente.

Por tanto, con base en los artículos 1 y 6 de la Constitución, 32 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 3, 4, 19 letras f) y g), 20, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 50, 62, 65, 66, 70,

71, 72 de la LAIP, 40, 50, 54, 55 y 57 de su Reglamento, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Tribunal de Ética Gubernamental, **RESUELVE:**

a) *Admitase* la solicitud de información planteada por la l señorita [REDACTED]

b) *Concédase el acceso a la información* a la señorita [REDACTED] y, en consecuencia *entreguesele* lo solicitado, y en lo que respecta a la demanda de amparo ref. 122-2019, contra actos del Instituto de Acceso a la Información Pública, solicitada por la señorita [REDACTED] en la versión pública correspondiente.

*Notifíquese.*

  
Wilber Alberto Colorado Servellón  
Oficial de Información  
Tribunal de Ética Gubernamental



UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
SCHOOL OF BUSINESS  
ADMINISTRATIVE SERVICES  
OFFICE OF THE REGISTRAR  
100 SHREVE DRIVE  
DAVIS, CA 95616  
TEL: (530) 752-1234  
WWW.UCDAVIS.EDU



1. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
2. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
3. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
4. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
5. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
6. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
7. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
8. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
9. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.  
10. I have read the above and agree to the terms and conditions of the contract.

Signature: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_